6. El Archivo General se compromete a facilitar la residencia militar a las personas becadas y a mantener las condiciones económicas y materiales acordadas de 240,40 euros mensuales (sin IVA), aplicables a cada persona en concepto de habitación individual y pensión completa. Recíprocamente, el personal que se aloje se comprometerá a respetar las condiciones propias del centro.

Cuarta. *Vigencia.*—El plazo de vigencia de este Convenio será de cuatro meses, a contar desde la fecha de la firma, prorrogable por periodos iguales siempre por acuerdo de las partes implicadas, manifestado quince días antes del vencimiento del plazo correspondiente.

Quinta. *Naturaleza Jurídica.*—El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa. Para la resolución de las dudas interpretativas que plantee, se acudirá a los principios establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y al resto del ordenamiento jurídico administrativo.

Sexta. *Jurisdicción.*—Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo.

Séptima. *Resolución.*—Será causa de resolución del presente Convenio: La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin o el incumplimiento grave acreditado por una de las partes

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio de Colaboración en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.—Por el Ministerio de Defensa, el Director general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Jorge Hevia Sierra.—Por la Generalidad de Cataluña, el Secretario general del Departamento de la Presidencia, Carles Duarte i Montserrat.—Por la Universidad Autónoma de Barcelona, el Presidente del Gabinete de Estudios Sociales y Nacionales, Josep María Solé i Sabaté.

MINISTERIO DE HACIENDA

21944 *RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios.*

El artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, crea, con la denominación de Instituto de Estudios Fiscales, un organismo público con la naturaleza de organismo autónomo, de los previstos en los artículos 45 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

En el artículo 3 del Estatuto del IEF aprobado por Real Decreto número 63/2001, se asignan las funciones, siendo éstas:

a) La investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico en las materias relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema económico y social, así como el análisis y explotación de las estadísticas tributarias.

b) La asistencia y colaboración con los órganos de la Administración encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y de Economía con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública.

c) La formación de los funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo.

d) El desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración Pública, Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en estas materias.

e) Las de carácter común y de gestión de los recursos y medios asignados al organismo autónomo.

f) La edición y difusión de las publicaciones oficiales relacionadas con la actividad propia del Instituto para el mejor cumplimiento de las competencias descritas en los párrafos a) a d) anteriores.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

El artículo 25 del citado Estatuto establece que los bienes y medios económicos del Instituto de Estudios Fiscales serán los siguientes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que está autorizado a percibir como consecuencia de sus actividades de gestión o explotación.

f) Las donaciones, herencias y legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

g) Los ingresos por actividades formativas, de investigación de edición y publicación, así como por otras prestaciones de servicios que, conformes a sus funciones pueda prestar.

h) Cualesquiera otros recursos que pudieran serle atribuidos.

Las actividades que realiza el IEF en cumplimiento de sus objetivos, en el seno del Ministerio, son de carácter gratuito.

Dada la experiencia con que cuenta en materia de ingresos y gastos públicos, la posibilidad de utilización de sus instalaciones y las competencias asumidas en materia de publicaciones, se considera necesario establecer «precios públicos», de acuerdo con la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, de 13 de abril, modificada por la Ley 25/1998, que establece en el artículo 26.1.b) «El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará: Directamente por los organismos públicos, previa autorización del Departamento ministerial del que dependen.»

Por todo ello, esta Dirección General resuelve:

Primero.—Establecer (previa autorización del Ministerio de Hacienda por Orden de 20 de septiembre de 2002), los precios públicos que se relacionan en el anexo a esta Resolución, que serán por los conceptos siguientes:

1. Precios públicos por prestación de servicios de formación.—La prestación de servicios de formación en que la organización corra a cargo del Instituto originará el derecho a la percepción de precios públicos por los conceptos que en su caso correspondan de entre los siguientes:

a) Dirección académica.

b) Impartición de clases.

c) Gestión y organización.

d) Compensación por cualesquiera otros gastos directamente derivados de un curso que sean pagados por el Instituto de Estudios Fiscales.

2. Precios públicos por prestación de servicios de biblioteca.

Segundo.—Los precios públicos fijados serán incrementados en el importe del IVA que en cada caso, resulte de aplicación de la normativa reguladora de dicho impuesto.

Tercero.—Atendiendo a la naturaleza de las actividades a desarrollar y a los destinatarios de las mismas, el Director del Instituto de Estudios Fiscales podrá establecer descuentos y bonificaciones en los precios públicos fijados en esta Resolución, que podrán llegar incluso a la exención completa de los mismos.

Cuarto.—El Instituto de Estudios Fiscales podrá firmar Convenios de Colaboración con entidades públicas o privadas fijando precios distintos a los establecidos en la presente Resolución, en la medida que sean necesarios para cumplir los objetivos del Convenio.

Quinto.—La administración y cobro de los precios públicos establecidos en la presente Resolución se efectuarán por el IEF de conformidad con la normativa reguladora de la materia y formarán parte de su presupuesto de ingresos.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—El Director general, Juan José Rubio Guerrero.

ANEXO

Euros

Prestación de servicios de formación*Programa de Estudios de Postgrado en Hacienda Pública y Análisis Económico*

Matrícula completa (600 horas lectivas)	5.000
Matrícula en una asignatura (fuera de programa)	800

Cursos y Seminarios sobre Investigación en Economía Pública

Matrícula curso (30 horas lectivas)	750
Matrícula curso (20 horas lectivas)	500
Matrícula seminario (10 horas lectivas)	300

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN

Prestación de servicios de formación pagado por los alumnos

Matrícula curso (4 horas lectivas)	45
Por hora adicional entre	10 y 30

Matrícula reducida del 50 por 100 para funcionarios, universitarios y licenciados en paro que lo acrediten.

Prestación de servicios de formación a solicitud de una entidad pública o privada

El precio-hora de la dirección académica del curso oscilará entre	40 y 140
Mínimo 300 euros por curso.	
El precio-hora de impartición de clases	120
El precio-hora de la gestión y organización del curso oscilará entre	30 y 60

Asistencia técnica

El precio-hora de los trabajos de asistencia técnica en materia jurídico-financiera y tributaria e información estadística se establece en 50 euros. El precio mínimo de toda petición será de 100 euros.

Tarifa reducida del 50 por 100 para apoyo técnico a la realización de tesis doctorales.

Para todas las peticiones de asistencia técnica, el IEF elaborará el correspondiente presupuesto, de acuerdo con los baremos establecidos en la presente resolución.

Prestación de servicios de Biblioteca*Prestación de servicios de fotocopia en Biblioteca*

Tarjeta 50 copias	3,00
-------------------------	------

Colaboraciones interbibliotecarias

Préstamo volumen original	4,80
Bloque completo de 10 fotocopias	3,30
Cada fotocopia adicional	0,15
Bloque inicial de 1 a 4 fotocopias enviadas por fax	3,30
Cada fotocopia adicional enviada por fax	0,80
Cada copia de imagen digital de un texto completo (1 a 150 páginas)	0,45
Cada copia adicional de imagen digital de un texto completo (de más de 150 páginas)	0,30
Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas	9,00
Cada copia de imagen digital adicional al anterior bloque	1,20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

21945 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas convocadas por Resolución de 16 de octubre de 2001, y se modifica la cuantía de las ya concedidas.

La Orden de 26 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril) establece las bases reguladoras para la concesión de determinadas ayudas de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural. Por Resolución de 16 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 264, de 3 de noviembre), del mencionado órgano directivo, se convocan todas las ayudas previstas en la antedicha Orden para el ejercicio de 2002.

De conformidad con lo establecido en el punto sexto de la Orden de 26 de marzo de 1998 y el punto 7 de los apartados segundo y tercero de la Resolución de 16 de octubre de 2001, esta Secretaría de Estado ha dictado las Resoluciones de 25 de marzo de 2002, de concesión de ayudas de acción y promoción cultural, y de formación de profesionales de la cultura, correspondientes a 2002.

Con posterioridad a esas Resoluciones, determinados beneficiarios no han aceptado expresamente las ayudas concedidas, o han formalizado la correspondiente renuncia, por imposibilidad de realizar las actividades y cumplir con las finalidades que motivaron la concesión de las ayudas. Todo ello ha permitido liberar determinados créditos en las aplicaciones presupuestarias que financian las citadas ayudas.

La Comisión de Estudio y Valoración se ha reunido el 11 de octubre de 2002 y ha formulado propuesta de concesión de determinadas ayudas, y la modificación del importe ya concedido a un beneficiario.

Por tanto, vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria; vista la propuesta elaborada por la Comisión de Estudio y Valoración en su reunión de 11 de octubre de 2002, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas y en el punto noveno, párrafo segundo, de la Orden de 26 de marzo de 1998 y en la Resolución de 16 de octubre de 2001, ambas citadas, dispongo:

Primero.—Modificar el importe de la ayuda concedida a la entidad beneficiaria que se relaciona en el anexo I a la presente Resolución, la cual queda obligada al cumplimiento de las condiciones y plazos previstos en la Resolución inicial de concesión.

Segundo.—Conceder las ayudas que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución, para la realización de las actividades, por las cuantías y en los plazos de ejecución que en el mismo se mencionan.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación a los beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Secretario de Estado, P. D. (Orden de 26 de marzo de 1998), la Directora general de Cooperación y Comunicación Cultural, Áurea Roldán Martín.